

Expediente: A/OBR-045923/2022 (7-F/23)

Obra: Tratamientos selvícolas para la mejora medio ambiental del monte “Dehesa de Valdecabañas”, término municipal de Belmonte de Tajo”

Trámite: Alegaciones Certificación final

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Área de Conservación de Montes
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

D. Miguel Ángel Duralde Rodríguez, con DNI [REDACTED], en representación de la compañía mercantil CEIFRA, S.A. con CIF nº A/78503075, cuya representación ya tengo anteriormente acreditada, y domicilio en Madrid, Calle Juan de Urbieto 42, DIGO:

I.- Que se ha notificado a mi representada Acta de Medición General y Relación Valorada final con fecha 22 de abril de 2025 del contrato de obras de “*Tratamientos selvícolas para la mejora medioambiental del monte “Dehesa de Valdecabañas”, Término Municipal Belmonte de Tajo”*”.

II.- Que, no estando conforme con las citadas Acta de Medición General y Relación Valorada final, al amparo de lo establecido en el artículo 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, formulo los siguientes

REPAROS

La relación valorada remitida no contempla los trabajos realmente ejecutados y acreditados, considerando que la certificación final debe ser por un importe de 0 euros, cuando está debidamente acreditado que se han ejecutado más trabajos de los inicialmente contemplados en el proyecto.

En el informe emitido por la Dirección Facultativa con fecha 10 de abril de 2025, dentro del expediente de imposición de penalizaciones, reconoce que en masa adulta se han cortado unos 27.172 pies, frente a los 18.401 estimados en el proyecto, y en el caso de la masa joven se han cortado 5.818 pies frente a los 4.889 pies previstos en el proyecto. Ahora bien, considera que en el proyecto se había previsto un peso medio inferior de hasta el 40%, de forma que sólo considera como exceso lo que supere dicho porcentaje, concluyendo que en el caso de la masa adulta el exceso de la corta sería del 25,51% y en el de masa joven sería del 16,03%.

Teniendo en consideración lo recogido por la Dirección Facultativa, cabe considerar que en el proyecto se estimaron unos trabajos con peso medio inferior al 40%, y por lo tanto, el precio quedó fijado considerando dicho peso, de forma que, si lo ejecutado supera dicho porcentaje el contratista no sólo tiene derecho a que se le abone los trabajos realmente ejecutados con un precio distinto al previsto en el proyecto.

A estos efectos, y para determinar el importe que debe abonarse a CEIFRA, se ha obtenido el volumen de madera, teniendo en consideración los datos recogidos en el proyecto, haciendo una proporción lineal entre los árboles cortados y el volumen. De forma que, en la masa adulta, por hectárea, el proyecto nos dice (página 19 y siguientes) que debemos cortar 176 árboles que cubican 13,69 m³. Con ello se calcula que los 205 árboles que suponen el 40% del peso de la clara cubierto con el presupuesto, cubican 16,11m³. Por lo que el total de los 260 árboles cortados realmente cubicarán 20,44 m³. Siendo un cálculo equivalente para la masa joven.

Cortas masa adulta							
Peso medio clara %	ha	nº pies actual	pies/ha	Nº pies corta	pies/ha corta	pies corta 40%	pies corta /ha 40%
20	46,9	15.649	334	3.130	67		
33	36,4	21.595	593	7.126	196		
50	21,4	16.289	761	8.145	380		
Total	104,7	53.533	511	18.401	176	21.413	205
Cortas masa joven							
Peso medio clara %	ha	nº pies actual	pies/ha	Nº piescorta	pies/ha corta	pies corta 40%	p/ha 40%
20	13,1	3.254	248	651	50		
33	4,4	2.791	634	921	209		
50	7,1	6.634	934	3.317	497		
Total	24,6	12.679	515	4.889	199	5.072	206

- Asimismo, existe un coste unitario por m3 realizado de acuerdo con los presupuestos del proyecto, que no es otro que dividir el precio por hectárea entre los m3 obtenidos en cada hectárea calculando la intensidad de clara del 40%. Para el caso de la masa adulta son 133,68 €/m3 y para la masa joven 182,24€/m3.

Cortas masa adulta	Pies realmente cortados	Pies realmente cortados/ha	Vol extracción m3	Vol extracc/ha m3	Vol extracción 40% m3	Vol extracc/ha 40% m3	€/m3 coste tratamiento
	27.172	260	1.433,41	13,69	1.686,36	16,11	133,68
Cortas masa joven							
	5.818	237	235,74	9,58	241,78	9,83	182,24

- Dado que el incremento de coste por el aumento de intensidad de clara no es lineal, para estimar la reducción de costes unitarios por incremento de trabajo se ha utilizado el propio proyecto que establece, como se acaba de decir, dos precios distintos para cada tipo de masa considerado, teniendo dos volúmenes iniciales diferentes y por lo tanto dos volúmenes distintos de extracción.
- En la masa joven se extraen 9,83 m³ por hectárea y en la masa adulta se extraen 16,11 m³, lo que supone un incremento del 64%, en cambio el coste unitario por m³, pasa de 182,24€ a 133,68€, lo que supone un 27% menos.
- La corta real en la masa adulta ha supuesto por hectárea un volumen de extracción de 20,44 m³, es decir un 27% más que la corta suponiendo el 40% de intensidad de la clara. En el caso de la masa joven, el volumen extraído ha sido de 11,28m³, lo que supone un incremento del 15% respecto del 40% de clara.
- La disminución del coste unitario para la corta real se estima con una reducción lineal respecto las presentadas en el Proyecto, por lo que para el coste unitario se propone una disminución del 11% en el caso de la masa adulta y del 6% en el de la masa joven, respecto del calculado en el Proyecto.
- Por último, se realiza otra apreciación. El Proyecto presenta una unidad de precio (hectárea de tratamiento completo) que en cualquier tarifa es la suma de diversos precios. En este caso se propone dividirlo en cuatro unidades que son muy comunes en cualquier tarifa, a las que se propone otorgarles los siguientes pesos relativos:

Clareo y poda: 26,51%

Saca a pista: 27,97%

Saca a cargadero: 6,80€

Eliminación: 38,72%

- Los pesos relativos se han elegido de acuerdo con la tabla que se adjunta según código de colores, que es copia del “precio unitario descompuesto” del Presupuesto del Proyecto. Hay que tener en cuenta que el peón especialista está repartido entre

saca a pista y eliminación a partes iguales y que los medios auxiliares están incluidos al completo en la eliminación, por simplicidad de cálculo.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN EL MONTE DEHESA DE VALDECABAÑAS									
		Medición h	Precio €	Total €	%	Clareo y poda	Saca a pista	En cargadero	Eliminación
104,7	Ha Clara en masa adulta								
	Peón especialista	71	11,36	806,56	37,46%				
	Capataz forestal	18	12,13	218,34	10,14%				
	Podadora	0,74	7,66	5,67	0,26%				
	Motosierra	48	3,42	164,16	7,62%	26,51%			
	Astilladora	4,4	21,27	93,59	4,35%				
	Tractor forestal	4,4	66,96	294,62	13,68%				38,72%
	Autocargador	1,8	81,30	146,34	6,80%			6,80%	
	Skidder	2,9	68,63	199,03	9,24%		27,97%		
	Peón oficial forestal	15,7	11,63	182,59	8,48%				
	Medios auxiliares %	0,02	2.110,90	42,22	1,96%				
	Total			2.153,12					100,00%
24,6	Ha Clara en masa joven								
	Peón especialista	59,15	11,36	671,94	37,51%				
	Capataz forestal	14,27	12,13	173,10	9,66%				
	Motosierra	40,9	3,42	139,88	7,81%	25,91%			
	Astilladora	3,7	21,27	78,70	4,39%				
	Tractor forestal	3,7	66,96	247,75	13,83%				38,94%
	Autocargador	1,5	81,30	121,95	6,81%			6,81%	
	Skidder	2,5	68,63	171,58	9,58%		28,34%		
	Peón oficial forestal	13	11,63	151,19	8,44%				
	Medios auxiliares %	0,02	1.756,09	35,12	1,96%				
	Total			1.791,20					100,00%

- Las reducciones propuestas en puntos anteriores se entienden que no deben afectar al precio del volumen de transporte del autocargador a los puntos de acopio (*saca a cargadero*). La relación entre volumen y coste es lineal en las cantidades de las que se hablan en este escrito.
- También deben de ajustarse en la partida desglosada de *Clareo y poda*, ya que existe una fuerte linealidad entre el número de pies cortados y el tiempo y coste gastado en su ejecución. Por ello, se propone reducir a la mitad el coeficiente reductor.
- En las partidas de *eliminación y saca a pista*, se mantiene la reducción propuesta del 11% y 6% respectivamente.
- Con todo ello, se obtiene un incremento estimado del coste soportado por esta empresa para el m3 extraído de 121,92 € en la masa adulta y de 166,22€ para la masa joven.

		Clareo y poda	Saca a pista	En cargadero	Eliminación
Peso relativo	100%	26,51%	27,97%	6,80%	38,72%
Masa adulta					
Precio €/m3 reducido	118,97	31,54	33,28	8,09	46,07
Precio €/m3 adjudicado	133,68	35,44	37,39	9,09	51,76
Precio €/m3 propuesto	121,92	33,49	33,28	9,09	46,07
Masa joven					
Precio €/m3 reducido	162,20	43,00	45,37	11,03	62,80
Precio €/m3 adjudicado	182,24	48,31	50,97	12,39	70,56
Precio €/m3 propuesto	166,22	45,66	45,37	12,39	62,80

- Teniendo en consideración que el volumen total realmente extraído, de acuerdo con los cálculos citados en los puntos anteriores, en la masa adulta ha sido de 2.139,89 m3 y en la masa joven 277,37 m3, esto supone un importe de 307.005,66€, y que el importe satisfecho en las certificaciones anteriores por estos conceptos ha sido de 269.495,43€, el importe pendiente de liquidar a favor de CEIFRA es la cantidad de 37.510,23€, en ejecución material, lo que considerando los gastos generales, el beneficio industrial y el coeficiente de adjudicación, salvo error, resulta un importe de 32.765,91€ (sin IVA).

	Coste propuesto €/m3	Número total m3 extraídos	Importe coste total
Masa adulta	121,92	2.139,89	260.902,28 €
Masa joven	166,22	277,37	46.103,38 €
Total, estimado €			307.005,66 €
Cobrado			269.495,43 €
Diferencia			37.510,23 €
A solicitar			32.765,91 €

Estando acreditado que CEIFRA ejecutó más trabajos de los contemplados en el proyecto, tiene derecho a que se le abonen, pues lo contrario supondría un enriquecimiento injusto. La doctrina del enriquecimiento injusto tiene como fundamento evitar que la Administración haga suya una obra que no se abona al contratista. Así lo expresa el Tribunal Supremo, además de en otras muchas cuya cita sería interminable, en su sentencia de 15 de Junio de 1999 (Ar.6449):

“TERCERO.- Frente al criterio que sostiene la parte recurrente en casación, no se ha vulnerado, con fundamento en las Sentencias de esta Sala de 20 de abril de 1992 y 21 de enero de 1994, la regla general de la «lex contractus», principio esencial de la contratación administrativa, puesto que si bien el Pliego de Condiciones es para las partes la ley del contrato y buena prueba es la jurisprudencia de esta Sala sobre el particular (Sentencias, entre otras, de 10 de marzo

de 1982 [RJ 1982\1692], 23 de enero de 1985 [RJ 1985\926], 18 de noviembre de 1987 [RJ 1987\9287], 6 de febrero de 1988 [RJ 1988\695] y la invocada Sentencia de 20 de abril de 1992) ello no excluye que se introduzcan modificaciones respecto de lo consignado en el Pliego, como reconoce la Sentencia de 28 de julio de 1987 (RJ 1987\7689), por lo que hay que llegar a la conclusión, frente al razonamiento vertido por la parte recurrente en casación, que no es lícito argüir que las obras adicionales no fueron aprobadas por la Administración contratante o que ésta no autorizase al Director de las mismas ordenar su ejecución o que ni siquiera fueron ordenadas por escrito al contratista, porque el principio de inalterabilidad de los contratos no puede llevarse hasta el extremo de que se produzca un enriquecimiento injusto en perjuicio del contratista, como reconoce sobre esta materia la Sentencia de esta Sala de 18 de junio de 1985 (RJ 1985\3228).

.../...

En efecto, lo realmente producido es una alteración contractual en virtud de acciones u omisiones por parte de la Administración y conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala (en Sentencias de 29 de septiembre de 1977 [RJ 1977\3552], 21 de marzo de 1983 [RJ 1983\3255], 27 de abril de 1987 [RJ 1987\4763] y 5 de junio de 1991 [RJ 1991\4862]) el principio general de riesgo y ventura por parte del contratista no sólo quiebra en los sucesos de fuerza mayor recogidos en el artículo 46 de la Ley de Contratos del Estado, sino también cuando la Administración contraviene el tenor del contrato, produciendo una alteración en su ejecución, como sucede en el caso de autos, en el que las obras han sido ejecutadas con alteraciones en virtud de las órdenes realizadas por cuenta de la dirección facultativa que actuaba en representación de la Corporación local y así lo reconoce expresamente la Sentencia impugnada, según se infiere del análisis de las actuaciones judiciales y del expediente administrativo, por lo que no queda justificada las afirmaciones que sobre este punto sostiene la parte recurrente en casación.

.../...

En este punto, la jurisprudencia viene suavizando la aplicación del principio de inalterabilidad contractual proclamado en el artículo 51 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y ha realizado una interpretación flexible de

los artículos 53 y 54 del citado Reglamento, declarando en Sentencias de 15 de marzo de 1978 (RJ 1978\1164), 21 de noviembre de 1981 (RJ 1981\5267) y 20 de diciembre de 1983 (RJ 1983\6354) que la aplicación del principio que veda un enriquecimiento injusto posibilita el reconocimiento en los contratos de obras de reclamaciones por exceso sobre el proyecto que hubiere sido efectivamente ejecutado como consecuencia de órdenes de la Administración, por entender que, en algunos casos, no se producía una alteración sustancial del proyecto, pero llegando a afirmar que si efectivamente fueron ordenadas las obras como se ha producido y probado en el caso examinado, los vicios existentes en dichas órdenes como consecuencia de los requisitos de competencia o procedimiento que no son imputables al contratista, no pueden oponerse a él para que éste pueda percibir su importe, puesto que consta acreditado que las órdenes se dieron por quienes para el contratista tenían la apariencia suficiente de ostentar la efectiva potestad en la contratación administrativa, criterio jurisprudencial que reitera, a mayor abundamiento, la doctrina de esta Sala contenida en las Sentencias de 12 de febrero de 1979 (RJ 1979\908) y 21 de noviembre de 1981 (RJ 1981\5267), en el supuesto de modificaciones en la prestación del contrato, como consecuencia de órdenes dadas por la dirección de la obra, lo que realmente ha sucedido en la cuestión examinada.”.

También resume la doctrina sobre el enriquecimiento injusto, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 2005 (RJ 2005\8290):

*“TERCERO. -Una reiterada doctrina jurisprudencial tiene establecido que los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa (SSTS de 27-12-99, 9-11-99, 15-10-99, 15-3-99, 19-11-99 y 11-7-97 [RJ 1997, 5929]), por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las obras irregularmente contratadas
.../...*

Alegando en síntesis; a), que ciertamente es aplicable a los contratos administrativos el principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto, pero que la jurisprudencia en los supuestos que ha considerado pertinente su aplicación, ha puesto de manifiesto, que para ello era necesario, que el exceso de obras que habían de abonarse al contratista no fuese imputable exclusivamente a su voluntad, sino que obedeciese a órdenes de la Administración; b), que en el presente supuesto, el demandante ejecuto presuntamente unas obras de un proyecto diferente al previsto inicialmente, sin orden expresa de la Administración y sin encargo, por tanto, dice, se debieron a la decisión unilateral imputable a la empresa contratista; c), que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia aparece en las sentencias de 7 de diciembre de 1994, 28 de enero de 2000 (RJ 2000, 1579) y 27 de junio de 1988 (RJ 1988, 4775) , de las que reproduce parte de sus Fundamentos de Derecho.

Y procede rechazar tal motivo de casación.

Además de por lo más atrás expuesto, porque no puede aceptarse, según los términos apreciados y valorados por la sentencia recurrida, que las obras se realizaran por decisión unilateral del contratista, al margen de la actuación de la Administración, como se alega, cuando la sentencia recurrida estima probado, a), la realización del proyecto por el Ingeniero Jefe de Vías y Obras de la Administración contratante, en base a las razones que el mismo expone, y b), que esas obras del proyecto fueron realizadas y que están en funcionamiento, lo que obviamente comporta, una aceptación aunque sea tácita de las obras realizadas, de parte de la Administración.

Y por todo ello se ha estimar que la solución final de la sentencia, de abono de las obras realizadas en beneficio de la Administración, que las ha recibido y están en funcionamiento y que cuando menos se realizaron en base a un proyecto técnico del Ingeniero Jefe de Vías Obras de la Administración, está en plena conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, que el propio recurrente invoca, sin que por tanto se puedan apreciar ninguna de las infracciones que el recurrente invoca, pues en caso contrario obviamente se generaría un enriquecimiento sin causa para la Administración y un perjuicio para el contratista.

También es de destacar la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de Abril de 2005 (JUR 2005\111029):

“El Ayuntamiento demandado opone a la prosperabilidad del recurso que las liquidaciones no han sido registradas en ningún momento en el Ayuntamiento y que recogen modificaciones de obra sobre el proyecto y presupuesto primitivo aprobado, ocurriendo lo mismo con la certificación referida a un proyecto ni aprobado ni adjudicado por la Administración, por lo que no pudiendo ni el contratista ni la dirección facultativa de las obras introducir ni ejecutar modificaciones en la obra sin la debida aprobación de la Administración, tramitación y aprobación que no han existido no procede que el Ayuntamiento se haga cargo de las mismas.

TERCERO.- De lo expuesto resulta que la Administración no niega que las obras cuyo importe se reclama hayan sido efectivamente realizadas por el contratista ni ordenadas por la Dirección facultativa de la obra, que de hecho ha expedido y firmado tanto la certificación como las liquidaciones, habiendo además recibido las obras sin reparo, siendo lo cuestionado si la Administración debe de abonar unas obras que exceden de lo inicialmente presupuestado sin haberse tramitado una modificación en forma aprobada por la Administración.

.../...

CUARTO.- Por lo que se refiere a la certificación nº 1 correspondiente al " Proyecto Complementario de la obra de pavimentación e infraestructura de las calles Ortega y Gasset, Perdiz y Embalse de Galapagar", es evidente que su importe tras tomarse en cuenta el importe de las liquidaciones dentro del margen de exceso del 10% del contrato ya excede del mismo y su reclamación no puede fundamentarse en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, a hora bien ello no significa que el recurrente no tenga derecho a su cobro al margen del contrato por aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto ya que son obras realizadas siguiendo las órdenes de la dirección facultativa.

Así es doctrina jurisprudencial reiterada la que entiende, entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª y Sección 7ª) de 28 de enero de 2000, cuyo fundamento de derecho tercero se transcribe a continuación ,que: "El principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa es, en efecto, aplicable a los contratos administrativos, como corrección al postulado de su inalterabilidad. Pero la jurisprudencia, en los supuestos en que ha considerado pertinente su utilización, ha puesto de manifiesto que, para ello, era necesario que el exceso de obras que habían de abonarse al contratista no fuese imputable exclusivamente a su

voluntad, sino que obedeciese a órdenes de la Administración. Así se ha aplicado dicho principio siempre que las órdenes procediesen de quien para el contratista tuviera apariencia de efectiva potestad (sentencia de 20 de diciembre de 1983); en el supuesto en que había sido prevista por las partes contratantes la necesidad de obras no incluidas en el proyecto (sentencia de 24 de enero de 1984); cuando ha habido órdenes de la Administración (sentencia de 20 de octubre de 1987), aunque tengan vicios de forma (sentencia de 27 de febrero de 1984)".

Y en la Sentencia de la expresada Sala y Sección de 23 de abril de 2002, en el fundamento de derecho cuarto declara: "Acreditada la existencia de las obras ejecutadas (artículos 47 LCE y 142 RGCE) se imponía, como estimó la sentencia recurrida, la obligación de pagar el coste de las obras, en virtud del principio del enriquecimiento injusto, aplicable a los contratos administrativos (como ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, en sentencias, entre otras, de 16 de octubre de 2000 y 26 de febrero de 1991). Así, la jurisprudencia de esta Sala (en sentencia de 20 de octubre de 1986) ha reconocido que la obligación de pago por parte de la Administración implica el importe también de aquellas obras que tengan carácter accesorio o complementario no incluido en el proyecto y que durante el curso de las obras principales se estime conveniente ejecutar, bien hayan sido objeto de contrato independiente o bien se hayan confiado al contratista de la principal, de acuerdo con los precios fijados en el contrato contradictoriamente. En todo caso, en el proyecto modificado, para que determine el derecho a su reconocimiento, es necesario que se produzca a tenor de los artículos 50 de la Ley de Contratos del Estado y 150 del Reglamento General de Contratación del Estado, la introducción de unidades de obra o modificaciones sustanciales en las características de las unidades de obra fijadas en el proyecto, sustancialidad que es lo que los preceptos citados exigen para dar lugar al proyecto modificado pretendido, como reconoce la sentencia de esta Sala de 3 de enero de 1996".

Y concluye el quinto: "Es de tener en cuenta, además, la aplicación con carácter general de las previsiones contenidas en los artículos 47 de la Ley de Contratos del Estado y 142 del Reglamento de Contratos del Estado, en los que su contenido se completa con la cláusula 49 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, en obras públicas, regulada por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, que reconoce el abono al contratista con arreglo al precio convenido de la obra que realmente ejecute, conforme al proyecto que sirve de base a la licitación, a sus modificaciones y a las órdenes dadas por escrito a la Administración".

Por su parte además de las ya transcritas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16-10-2000 expresa : "Los motivos segundo a séptimo del recurso, todos ellos fundados en el número 4 del artículo 95.1 , deben ser resueltos conjuntamente, ya que responden a una misma argumentación, basada en la inalterabilidad del contrato administrativo, en la necesidad de expediente y acto expreso de aprobación para introducir modificaciones en la obra proyectada, y en la consiguiente falta de derecho del contratista a cobrar obras de modificación ejecutadas sin autorización de la Administración ... Todos estos motivos, fundados en la inalterabilidad de los contratos administrativos una vez celebrados, salvo que la Administración contratante autorice su modificación, deben ceder ante la doctrina jurisprudencial que aplica a los contratos administrativos, como corrección al postulado de su inalterabilidad, el principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa. De modo que si el Ayuntamiento ha experimentado un enriquecimiento como consecuencia de las obras realizadas por el contratista fuera de contrato, y el contratista ha sufrido un empobrecimiento correlativo al haber sufragado el importe de tales obras, el Ayuntamiento debe satisfacer su coste, pues de otro modo se enriquecería injustamente con dichas obras, que pasan a integrarse en su patrimonio, siempre que el contratista no hubiese actuado unilateralmente, sino siguiendo órdenes de la Administración o del Director de la obra, que, en este punto, representa a la Administración contratante, aunque tuviesen vicios de forma (cfr., entre otras muchas, sentencias de 20 de diciembre de 1983, 24 de enero de 1984, 20 de octubre de 1987, y, más recientemente, 26 de febrero de 1999 y 28 de enero de 2000 ".

En el supuesto presente es aplicable por razones temporales la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo art. 14 establece que debe abonarse al contratista el precio "en función de la prestación realmente efectuada", lo que se deduce igualmente del art. 100 de la misma, que habla de "prestación realizada".

En resumen, si las obras se han realizado y han contribuido a completar el proyecto, supliendo unas deficiencias y presentando terminaciones ajustadas a los fines propuestos, debe concluirse que no se puede consentir desequilibrio económico entre los beneficios recibidos por el Ayuntamiento demandado, como consecuencia de la realización de tales obras no referidas en proyecto, y las cargas sufridas por la otra parte, como consecuencia de su real y efectiva ejecución.

También es de la misma opinión el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sentencias como la dictada el 17 de Diciembre de 2003 (JUR 2004\78444) que así se expresa:

“Afirma la actora que durante la ejecución de las obras y por indicación de la Sra. Alcaldesa ejecutó más obras de las inicialmente contratadas, por un importe de 3.954.533 ptas. (IVA incluido), las cuales se encuentran descritas y valoradas en la factura 2000/1 de fecha 31-01-00 que aporta con la demanda. Entiende que aunque las obras estuvieran ajustadas a precio alzado debe pagársele el exceso ejecutado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1593, segundo inciso, del Código Civil (LEG 1889, 27) , evitando de esta forma un enriquecimiento injusto para el Ayuntamiento como ha establecido reiteradamente la jurisprudencia, máxime teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no niega que tal exceso de obras se haya ejecutado, sino que deniega la reclamación exclusivamente por no haber iniciado expediente previo al efecto, aunque luego en la resolución que desestima el recurso de reposición, en el que se pedía la iniciación de dicho expediente, no diga nada al respecto.

.../...

De lo anterior se desprende la obligación del Ayuntamiento de abonar a la actora las obras ejecutadas de más por la actora, descontando el precio de las ejecutadas de menos y ello aunque no conste que fueran encargadas directamente por el Ayuntamiento a través de su Alcaldesa, como afirma la actora, ya que lo importante es que fueron realmente realizadas y entregadas al Ayuntamiento, en la confianza de que iban a ser pagadas, estando bien fundada la reclamación no solo en el art. 1593 CC (LEG 1889, 27) alegado en la demanda, y el art. 100. 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/95 (RCL 1995, 1485 y 1948), sino en el principio de buena fe (art. 7.1 CC). Es evidente que ante la realidad de que dichas obras fueron efectivamente realizadas en beneficio del Municipio, la justificación para reclamar su importe viene además fundamentada en evitar que el Ayuntamiento obtenga un enriquecimiento injusto con el correlativo empobrecimiento de la contraparte; siendo numerosas las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Contencioso-Administrativo que han aplicado esta teoría (SSTs de 2-5-60 [RJ 1960, 2123] , 16-10-1965 [RJ 1965, 3854] , 4-7-66, 27-3-1969 [RJ 1969, 2369] , 10-3-72 [RJ 1972, 2107] , 12-6-84 [RJ 1984, 3463] y 6-4-87, entre otras).

Por lo expuesto,

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por formulados reparos a la relación valorada correspondiente al contrato ***“Tratamientos selvícolas para la mejora medioambiental del monte “Dehesa de Valdecabañas”, Término Municipal de Belmonte de Tajo”***, darle la tramitación que proceda hasta dictar acuerdo por el cual, estimando dichos reparos, se aprueba la certificación final de la obra con un importe de 32.765, 91 euros (más IVA) a favor de CEIFRA S.A.

En Madrid, a fecha de la firma

██████████
MIGUEL
ANGEL
DURALDE (R:
A78503075)

Firmado
digitalmente por
██████████ MIGUEL
ANGEL DURALDE
(R: A78503075)
Fecha: 2025.04.28
23:44:55 +02'00'